



INFORME DE ANALISIS

(AL 31 DE OCTUBRE DE 1991)

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

A. ANALISIS POLITICO: SEGURIDAD CIUDADANA

El Gobierno ha sido exitoso en afirmar su propia iniciativa política. Los dos objetivos definidos para la segunda etapa del actual período presidencial -perfeccionamiento de las instituciones democráticas y crecimiento con equidad- y los principales lineamientos estratégicos establecidos para el mismo período, han sido bien acogidos al interior de la actual coalición de Gobierno, pasando a constituirse en un adecuado y necesario elemento ordenador al interior de la misma. Las dos jornadas que han tenido lugar con funcionarios de Gobierno y con los parlamentarios y dirigentes partidarios de la Concertación, convocadas por el Presidente de la República, así lo corroboran.

La oposición, por su parte, enfrenta serias dificultades, tanto internas como externas. Habiendo fracasado en su intento por mostrar un deterioro político del Gobierno y frente a su propia incapacidad para capitalizar potenciales descontentos o desgastes gubernamentales, todo ello con miras al escenario electoral de 1992 y 1993, recurre como último expediente al tema de la seguridad.

De alguna manera, la derecha opositora, desde el inicio de la actual administración, ha apostado a una doble incapacidad por parte del actual Gobierno: una, en materia de orden económico y la otra en orden público. Sería la incapacidad de la actual coalición para hacer frente a esa doble demanda, muy sentida por parte de la población, el factor que terminaría por constituirse en el principal capital político de la oposición. La inflación y el pobre desempeño económico más la inseguridad serían las dos caras del Gobierno de la Concertación.

Consolidadas las bases del orden económico democrático, manifestadas en el clima de confianza establecido en relación al empresariado y en los principales indicadores económicos, sólo le queda a la derecha el expediente del orden público o, mas específicamente, de la seguridad ciudadana.

La apuesta de la derecha se basa en el clima de opinión pública predominante, que da cuenta de una alta sensibilidad frente al tema en cuestión. Así, por ejemplo, la última encuesta del CERC señala que, por primera vez en lo que va corrido del actual período presidencial, el tema de la "violencia" se convierte en la principal preocupación de la opinión pública (en circunstancias que en Abril de 1990, recién asumido el Gobierno, el tema de la violencia aparecía, según la misma encuesta, en séptimo lugar). Por su parte, el 71 por ciento de los encuestados considera que la delincuencia "ha aumentado".

En relación al tema en cuestión hay que considerar, **dos aspectos claramente diferenciables.**

Por un lado, existe un **elemento objetivo**, que está dado por lo mucho que el actual Gobierno ha hecho en materia de seguridad. Claramente, se ha revertido la tendencia que se advertía en el régimen anterior de una sistemático y deterioro de los aparatos policiales, **Carabineros e Investigaciones**. Los cuadros que se acompañan al presente informe muestran en forma incontrarrestable los recursos fiscales que se han dedicado a fortalecer las capacidades financieras, humanas, tecnológicas y de infraestructura de ambas instituciones policiales durante lo que va corrido del período. Mas aún, el Gobierno de la Concertación ha depositado toda su confianza en la acción de Carabineros e Investigaciones.

Junto con haber mejorado las capacidades de los órganos policiales y depositado en ellos la confianza y el apoyo del Gobierno, se han definido tres ámbitos de acción muy precisos y claramente diferenciados, en todos los cuales se ha actuado en forma decidida y simultánea: **terrorismo, narcotráfico y delincuencia**.

A decir verdad, es en este último nivel donde reside el problema mayor. Nadie puede desconocer que el terrorismo ha disminuido ostensiblemente y, aunque el tráfico de drogas ha aumentado según lo indican las cifras sobre incautaciones de estupefacientes, el Gobierno ha creado una instancia especial para abocarse al combate contra el narcotráfico, constituyéndolo en una área de atención preferente en este campo.

El problema, pues, es el de la delincuencia común. Aunque es mucho lo que se ha hecho al respecto y pese a que la eficacia de la acción policial ha mejorado y comienza a cobrar una mayor visibilidad, es un hecho que cuantitativa y cualitativamente la situación aparece como preocupante para la opinión pública.

Este es, precisamente, el **segundo elemento** que hay que considerar. Aún cuando objetivamente es evidente que este Gobierno ha hecho mucho mas que el anterior por mantener las capacidades policiales en un buen nivel, lo cierto es que subjetivamente predominan sentimientos de inseguridad.

En este caso estamos ante lo que el Ministro del Interior ha llamado "inseguridad subjetiva", que corresponde precisamente a esta percepción de inseguridad que predomina en la opinión pública.

Es precisamente porque este elemento subjetivo es el mas difícil de asir, que, junto con las medidas concretas y objetivas que el Gobierno ha adoptado, debería implementarse una política encaminada a contrarrestar esta percepción generalizada, con el objeto de impedir que se constituya en un capital político de la derecha que, bien explotado, puede tener consecuencia electorales adversas para la actual coalición de Gobierno.

Lo anterior significa **dar una batalla de opinión pública, agresiva y consistente, dirigida especialmente contra la derecha opositora, encaminada a comunicar la idea central de que en democracia hay mas seguridad que en dictadura**.

Lo anterior cobra aún mayor importancia y se hace especialmente difícil cuando se tiene en cuenta que, al menos en el caso chileno, el tema del orden público y, en general, de la seguridad ciudadana, aparece con mayor propiedad como un tema "de derecha". Esta última ha logrado, históricamente, una cierta legitimidad frente al tema, que no es otra cosa que un mito -alguien ha dicho incluso que la derecha tiene una "ideología de masacre"- pero que tiene algún arraigo en la cultura política chilena.

Ello aparece reforzado, últimamente, por una cierta actitud entre los partidarios del Gobierno que tiende a inhibirse frente a temas como la represión en materia de seguridad, producto de la experiencia vivida en la historia de los últimos años y de un cierto prurito que confunde el tema de los derechos humanos con una actitud de complacencia frente a quienes atentan contra la seguridad ciudadana.

Todos estos elementos, unidos al manejo del tema por medios de comunicación, hacen que la derecha aparezca con mayor propiedad, o al menos con una cierta legitimidad, frente al tema de autoridad y orden público.

Lo dicho anteriormente y la necesidad de dirigir los dardos contra la derecha opositora con miras a contrarrestar este clima de "inseguridad subjetiva", no requiere ni de campañas del terror, ni de ningún tipo de recurso que nos saque del estilo que ha ido imponiendo el actual Gobierno.

Lo que se hace necesario es recoger las múltiples iniciativas que el Gobierno está llevando a cabo, en materia de terrorismo, narcotráfico y delincuencia, en relación a Carabineros e Investigaciones, y **perfilar una política global de seguridad que implique darle al tema un tratamiento integral, constituyéndola en verdadera política de Estado (y no sólo de Gobierno)**, comunicada solemnemente a la ciudadanía tal como se ha hecho en casos como infraestructura y juventud.

Son muchas las iniciativas y políticas que el Gobierno ha llevado a cabo y está siguiendo en materia de seguridad ciudadana. A lo que ya se ha dicho se puede agregar el trabajo del Consejo de Seguridad Pública, las iniciativas legales que se discuten en el Parlamento, la política frente a las instituciones financieras y las medidas de seguridad que existen al respecto, entre otras.

No se trata de introducir nuevas medidas, o innovaciones respecto de lo que se está haciendo. La sugerencia apunta en un sentido más comunicacional y de estrategia política: recoger todas nuestras medidas e iniciativas y presentarlas al país en un sólo bloque, coherente y cohesionado, que defina **la política de seguridad ciudadana** para el próximo quinquenio, a partir de una filosofía básica que es la sustentada por el Gobierno y la Concertación, afirmando para esta política el carácter de **política de Estado** y demandando el apoyo y cooperación de todos los sectores políticos y sociales para su ejecución.

Se trataría de una operación enteramente análoga a la hecha en materia de infraestructura.

Ello reportaría varias ventajas. Primero, refutaría la acusación opositora de que el gobierno carece de una política en esta materia. Segundo, apaciguaría las inquietudes dentro de las filas de la propia Concertación y proporcionaría a funcionarios, parlamentarios y partidos un lenguaje y una visión común sobre el tema, elemento básico para el éxito en el debate público. Tercero, permitiría al Gobierno acentuar su iniciativa ante la opinión pública, particularmente de cara al escenario electoral de 1992.

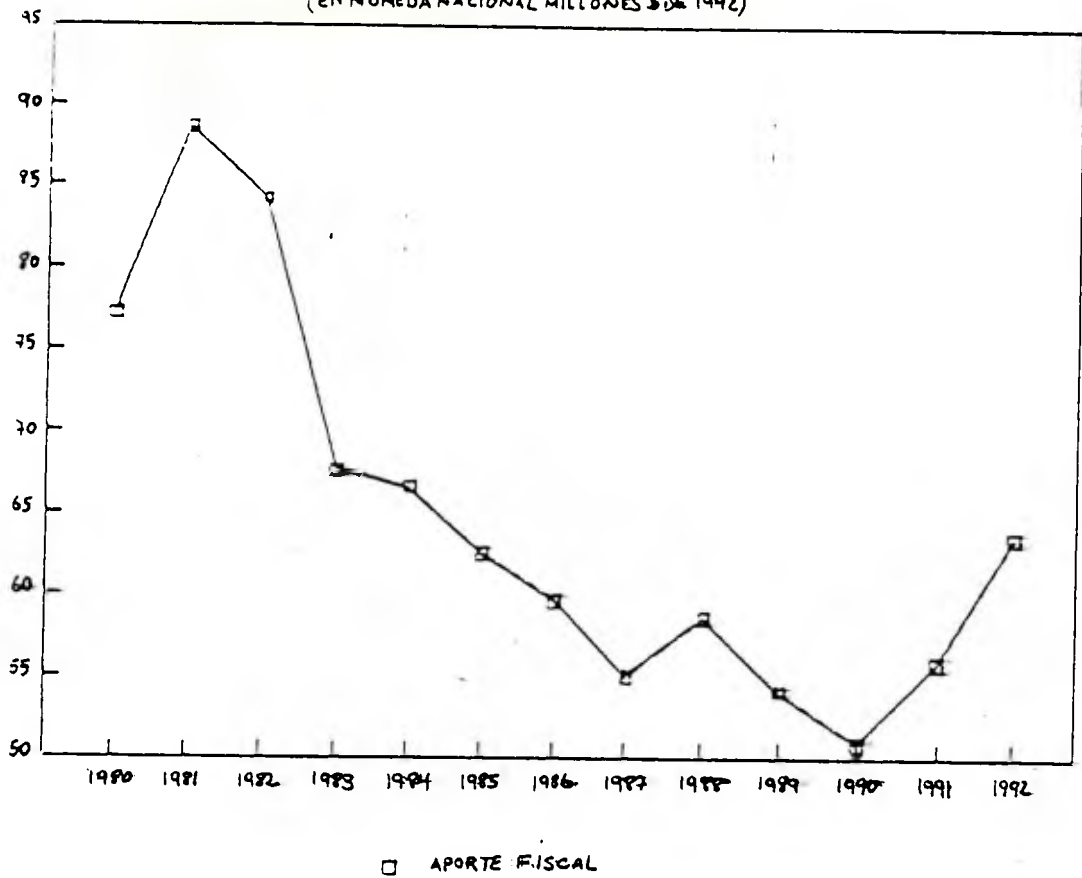
Lo que se sugiere, pues, es reunir estas múltiples iniciativas y constituir las en una política global de seguridad que implique darle al tema un tratamiento integral, constituyéndola para tal efecto en política de Estado.

Como lo indican otras numerosas iniciativas del Gobierno frente a una gran variedad de temas, **es esta visión global lo que permite influir en los climas de opinión pública.** El reciente anuncio sobre política juvenil, la política de infraestructura, la política educacional recientemente dada a conocer en relación al MECE, la misma política económica, son todas ellas políticas globales que procuran atender de manera integral a los distintos problemas y desafíos que enfrenta el actual Gobierno en los distintos ámbitos de acción.

Explicitar una política de este tipo en el campo de la seguridad ciudadana, haciéndola más visible; asumir una actitud más agresiva frente a la derecha opositora mostrando sus propias inconsistencias; anteponer a la misma una política gubernamental sólida y coherente; hacer del tema de la seguridad un tema del actual Gobierno de la Concertación y no "de derecha", como pareciera ser la percepción generalizada, son todos ellos elementos que nos pueden permitir, contrarrestar este clima de opinión pública basado en la "inseguridad subjetiva" e impedir, de esta manera, que el tema pueda ser capitalizado políticamente por parte de la derecha.

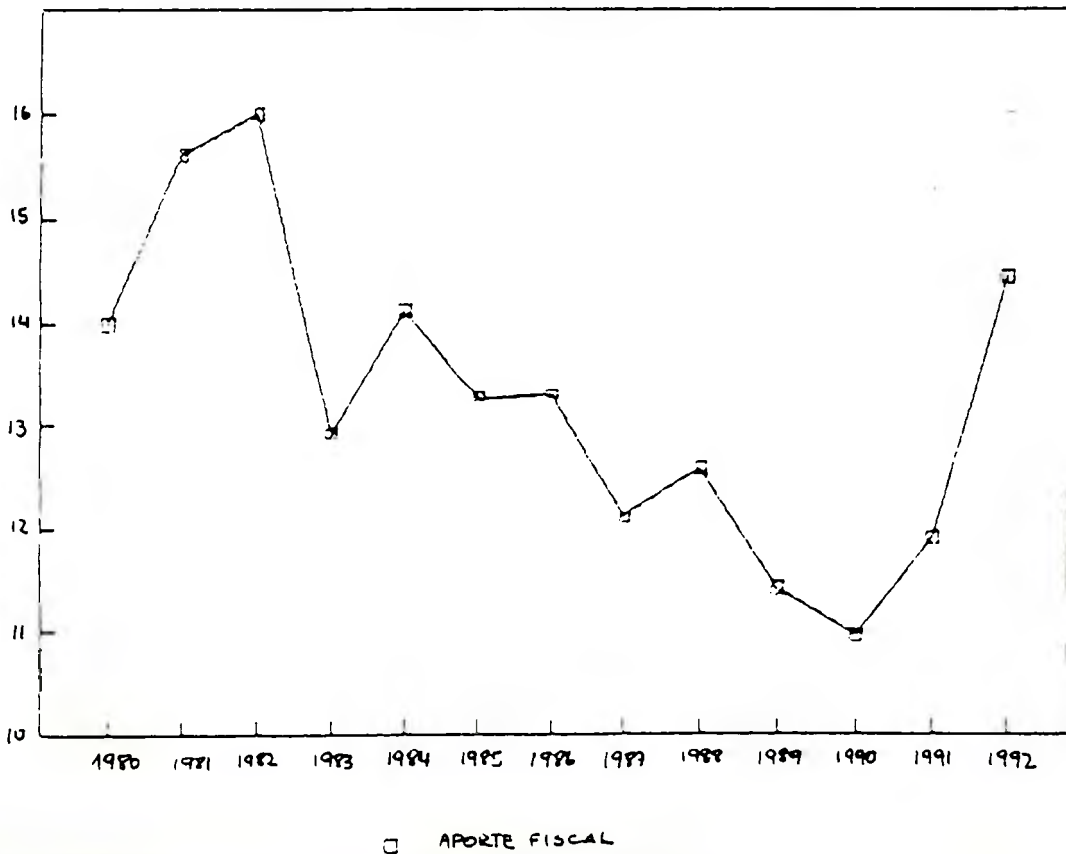
APORTE FISCAL A CARABINEROS

(EN MONEDA NACIONAL MILLONES \$ DE 1992)



APORTE FISCAL A INVESTIGACIONES

(EN MONEDA NACIONAL MILLONES \$ DE 1992)



B. ANALISIS ECONOMICO

En el ámbito económico, el tema más preocupante es el alto IPC que se espera para este mes. Según se desprende de las tasas de interés nominales y reales determinadas por el Banco Central, esta institución estima que la inflación de Octubre llegará a 2,7%.

Si dicha estimación se concreta, el IPC acumulado en lo que va corrido de 1991 alcanzaría a 15,9%, mientras que la variación acumulada en los últimos doce meses ascendería a 17,6%. Para no sobrepasar el 18% de inflación anual durante 1991, se requiere que en el último bimestre del año la inflación mensual no supere el 0,9% en promedio.

Después de cuatro meses consecutivos con tasas de inflación inferiores al 2% mensual, el IPC de Octubre tendrá -así como el pronóstico está teniendo- un indudable efecto político desfavorable para el gobierno. En un ambiente tan sensibilizado frente a los indicadores coyunturales y con una economía con tan alto grado de indexación y de endeudamiento, es obvio que un IPC de 2,7% generará un grado de inquietud no despreciable.

Sin embargo, el gobierno tiene elementos para desdramatizar dicha cifra y, además, tiene el deber de hacerlo para evitar el efecto pernicioso que las expectativas inflacionarias puedan tener sobre la inflación futura y sobre la inversión y el desempleo.

En primer lugar, es conveniente analizar la composición de la inflación de Octubre. Según datos confiables, el item Alimentos presentará un alza superior a 4,5%, lo cual significa que dicho rubro aportará más de 1,6 puntos porcentuales de inflación. Dentro del rubro Alimentos, el mayor aporte lo realizan las frutas frescas (0,8 puntos porcentuales) y las verduras y tubérculos (0,311), lo cual refleja el carácter fuertemente estacional del elevado IPC de este mes, fenómeno que se vio agravado por la ola de frío que afectó a la zona central del país y que perjudicó seriamente a las hortalizas y a los frutales.

El elemento que más deja de manifiesto la anormalidad del IPC de Octubre es que los tomates presentan un alza de más de 50% en su precio, generando alrededor de 0,6 puntos porcentuales de inflación.

Es probable que vuelva a aparecer en el tapete el problema de la estacionalidad del índice y se plantee que deba calcularse desestacionalizado o excluir productos con alta variabilidad. Sin embargo, esa polémica es inconducente pues lo real es que el poder adquisitivo de los hogares varía en forma distinta a los largo del año y por eso el IPC se calcula mes a mes. Los mismos productos agrícolas que durante estos meses presionaron el índice para que subiera, lo inducirán a la baja entre Diciembre y Febrero y de ese modo se reflejará la favorable evolución del poder adquisitivo en esos meses.

Además de analizarse la composición del índice, es conveniente revisar lo que ha ocurrido en períodos anteriores. En este sentido, cabe señalar que en Octubre normalmente la variación del IPC es alta y siempre el rubro Alimentos experimenta un alza de precios superior al resto de la canasta. Sin ir más lejos, en 1990 -en medio de la crisis del Golfo Pérsico- el IPC en Octubre subió 3,8%, mientras los Alimentos se encarecían en un 6,25%. Asimismo, durante Octubre de 1989, el IPC general subió 2,9%, mientras el IPC del rubro Alimentación crecía 4,5%.

Las cifras de 1990 son especialmente ilustrativas, pues en Noviembre y en Diciembre -después de una inflación de 8,9% entre Septiembre y Octubre- la variación del IPC no alcanzó al 1% mensual.

Se podría argumentar que dicha comparación no es válida ya que en el último bimestre del año pasado debió prolongarse la política de ajuste monetario para no validar una inflación mayor, en cambio ahora la política monetaria es más expansiva. Sin embargo, el director del Banco Central descartó la posibilidad de que se produzca un rebrote inflacionario por causas monetarias ya que la oferta de dinero se ha expandido sólo en un 8% real, lo cual es compatible con el actual ritmo de reactivación y de baja inflación. Por otra parte, en este momento los aranceles de importación son más bajos que hace un año, por lo tanto, a medida que avanza la reactivación se observa un mayor ritmo de crecimiento de las importaciones, lo cual aminora la presión inflacionaria que se produce por el exceso de oferta de divisas.

Durante esta semana, la SOFOFA publicó su estimación del crecimiento de las ventas y de la producción industriales. De acuerdo a esas cifras, la producción durante Septiembre creció 4,8% con respecto a igual mes de 1990, con lo cual se acumula un crecimiento de 1,3% en los primeros nueve meses del año. Si bien estas cifras reflejan un crecimiento inferior al que muestran los datos del INE, los dirigentes de la SOFOFA estiman que durante el último trimestre habrá un fuerte repunte, lo que permitirá terminar el año con un crecimiento industrial cercano al 3%. Por su parte, el INE publicó las cifras de ventas reales, de supermercados correspondientes a Septiembre, las cuales crecieron 5,9% con respecto a Septiembre de 1990 y 10,4% en lo que va corrido de 1991. Cabe señalar que tanto las cifras industriales como las de supermercados presentan bajas en Septiembre respecto al mes anterior, pero esto se debe al reducido número de días hábiles que posee Septiembre.

Los pronósticos del IPC y las medidas que el gobierno ha aplicado para introducir mayor equidad al modelo económico han dado pie para que el presidente de COPEC, Felipe Lamarca, plantee que estamos viviendo una "contrarrevolución silenciosa", ya que se estarían revirtiendo las condiciones que permitieron la "revolución silenciosa" que Joaquín Lavín describe en su conocido libro. Esta afirmación fue respaldada por el empresario Eleodoro Matte.

Sin embargo, al leer los planteamientos de Matte se descubre que sólo coincide con Lamarca en que hay una gestión insatisfactoria en algunos mandos medios, especialmente en regiones. En cambio, reconoce que se percibe que el gobierno está comprometido con los equilibrios macroeconómicos y con la economía social de mercado. Asimismo, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, José Antonio Guzmán, expresó que él no considera que exista tal contrarrevolución silenciosa, aunque hay algunos elementos aislados que no son satisfactorios.

Si se comparan estas aseveraciones con lo expuesto por el ministro Ominami, tanto en una entrevista de prensa como en la televisión, en el sentido de que la política económica responde a las líneas que la mayoría del país desea y que no se ven amenazadas por objetivos planteados, pero que efectivamente se debe avanzar en el desarrollo de un sector público más eficiente y menos burocrático, se concluye que el diagnóstico entre el gobierno y empresarios es relativamente coincidente: la modernización del sector público es un elemento necesario para seguir desarrollando al país y queda mucho por hacer al respecto.

Si se asume esta tarea con decisión y se mantiene la calma ante los tropiezos coyunturales que se puedan enfrentar, la gestión pública en las áreas económica y social será compatible con los objetivos que se plantearon al asumir el gobierno democrático.